



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-008-2020-00219-01 (O2-22-265)  
**Demandante:** OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES  
**Demandada:** COLPENSIONES E.I.C.E. E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S.  
**Procedencia:** JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No.245 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022  
**Asunto:** PENSIÓN DE VEJEZ – MORA DEL EMPLEADOR

En Medellín, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2020-00219-01 (O2-22-265), promovido por **OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES** contra **COLPENSIONES E.I.C.E.** e **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S.**, con miras a resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 21 de junio de 2022 de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### 1. ANTECEDENTES

El señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en procura de que se condene a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. al pago de los aportes para pensiones causados entre el 23 de

septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, se condene a COLPENSIONES E.I.C.E. al reconocimiento de la pensión de vejez, y al pago las mesadas que se hubieren causado desde el momento en el que cumplió la edad mínima, junto con los intereses de mora por la omisión en la que incurrió respecto del cobro de los aportes con mora del empleador, se condene a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. al pago de las mesadas dejadas de percibir, a título de indemnización de perjuicios, por la omisión en la que incurrió respecto del pago oportuno de los aportes para pensiones, y se condene en costas a las demandadas.

Como fundamento fáctico expuso que nació el 29 de septiembre de 1952, que laboró al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, empleador que lo afilió oportunamente al Sistema General de Pensiones; que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 27 de noviembre de 2012, prestación que fue denegada mediante la Resolución GNR 021933 del 04 de marzo de 2013, porque solo registraba 664 semanas cotizadas, decisión que fue recurrida pero confirmada a través de la Resolución GNR 4956 del 09 de enero de 2014, en sede de reposición, porque solo tenía 756 semanas cotizadas, y mediante la Resolución VPB 6755 del 30 de enero de 2015, en sede de apelación, porque solo contaba con 769 semanas cotizadas.

Manifestó que en el año 2013 promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, pretensión que fue acogida en la primera instancia, pero que fue revocada en la segunda instancia bajo el argumento de que la simple acreditación de la existencia de la relación laboral con INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., no obligaba a COLPENSIONES E.I.C.E. a iniciar las acciones de cobro coactivo.

Sostuvo que el 22 de octubre de 2014 le solicitó a COLPENSIONES E.I.C.E. la corrección de su historia laboral, pero su petición fue desestimada el 28 de noviembre de 2014; que a través de la Resolución GNR 173683 del 12 de junio de 2015 obtuvo el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por la suma de \$9.353.566, liquidada sobre 790 semanas cotizadas; que el 19 de septiembre de 2017 interpuso acción de tutela en orden a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero la misma fue denegada mediante la Resolución SUB 243651 del 30 de octubre de 2017, porque solo contaba con 871 semanas cotizadas, y que el 06 de febrero de 2018 insistió en la solicitud de corrección de la historia laboral, pero su petición fue desestimada el 13 de agosto de 2017.

Finalmente adujo que INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. y COLPENSIONES E.I.C.E. le han causado un grave perjuicio con la omisión en la que incurrieron respecto del pago y cobro

de los aportes para pensiones, omisión que no le ha permitido disfrutar de la prestación por vejez que causó desde el 29 de septiembre de 2012, cuando arribó a los 60 años de edad.

### **1.1. Trámite de Primera Instancia**

La demanda se admitió el 25 de enero de 2021 (doc.05, carp.01), y se notificó el 16 de marzo de 2021 a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. y COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.08, carp.01), el 01 de julio de 2022 a la Procuradora Judicial Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social (docs.34-35, carp.01), y el 05 de julio de 2022 a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (doc.36, carp.01).

En su escrito de contestación (doc.07, carp.01), INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. admitió que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES laboró a su servicio entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, y lo afilió al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el momento en el que se vinculó laboralmente con la empresa. Aseveró que, durante la vigencia de la relación de trabajo con el actor, siempre le canceló al ISS los aportes correspondientes, y que dicha entidad, ni COLPENSIONES E.I.C.E. iniciaron en su contra y en favor del demandante, acción alguna tendiente al pago de las cotizaciones por los presuntos periodos en mora del empleador. A su vez, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y de mérito excepcionó la inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de título y causa en el demandante, cobro de lo no debido, pago, compensación y prescripción.

Por su parte, COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.09, carp.01), admitió que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES nació el 29 de septiembre de 1952, y el contenido de las Resoluciones GNR 021933 del 04 de marzo de 2013, GNR 4956 del 09 de enero de 2014, VPB 6755 del 30 de enero de 2015, GNR 173683 del 12 de junio de 2015, y SUB 243651 del 30 de octubre de 2017. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que el asunto de la referencia ya fue sometido a debate, en el proceso conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-008-2013-00831-00, el cual, respecto del proceso de la referencia, tiene identidad de partes, objeto y causa pretendí, y que, en todo caso, el actor no acredita la densidad de semanas exigidas para hacerse merecedor al reconocimiento de la prestación pensional deprecada. De consiguiente, propuso como previa la excepción de cosa juzgada, y de mérito las que denominó carga dinámica de la prueba – existencia de la relación de trabajo, omisión de afiliación, deber de condicionar los efectos del cálculo actuarial, riesgo de fraude, falta de legitimación en la causa, inexistencia de reconocer la pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

## **1.2. Sentencia de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 21 de junio de 2022 (doc.38, carp.01) por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia en la que se declaró que al señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, a partir del 01 de octubre de 2012, en suma equivalente a un (1) SMLMV; se condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a pagar en favor del demandante la suma de \$92.311.904 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 01 de diciembre de 2012 y el 31 de mayo de 2022, incluyendo la mesada adicional de diciembre; se condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a continuar cancelando al actor, a partir del 01 de junio de 2022, una suma equivalente a un (1) SMMLV por concepto de mesada pensional, sin perjuicio de los incrementos y descuentos de ley; se declaró probada la excepción de compensación y se autorizó a COLPENSIONES E.I.C.E. a descontar de la suma adeudada, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida por valor de \$9.353.566, debidamente indexada; se condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde el 28 de marzo de 2013 y hasta la fecha del pago; se absolvió a INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. de la indemnización de perjuicios deprecada, y se condenó en costas a COLPENSIONES E.I.C.E., en favor del demandante.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado argumentó que en el plenario quedó acreditado que el actor no solo estuvo afiliado al Sistema General de Pensiones, sino también que su empleador realizó los respetivos aportes, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, por 286,45; que cada una de las historias laborales incorporadas registra un numero diferente de semanas cotizadas, por lo que se tuvo en cuenta la más favorable para los intereses del afiliado, con 855 semanas cotizadas, que teniendo en cuenta ese total de semanas, el actor acredita los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Decreto 758 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición, que el reconocimiento de la prestación debe hacerse efectivo desde el día siguiente al de la última cotización, y que el pago de los intereses de mora es procedente por el error en el que indujo la administradora demandada al actor.

## **1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta**

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada integralmente en su favor, bajo el grado jurisdiccional de consulta.

#### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 01 de agosto de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 08 del mismo mes y año (doc.03, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2213 de 2022, presentaran sus alegatos de conclusión por escrito.

El ente societario INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. alegó el 17 de agosto de 2022 (doc.04, carp.02), en el propósito de que se confirme la sentencia de primera instancia, indicando que el actor fue afiliado al Sistema General de Pensiones, por lo que COLPENSIONES E.I.C.E. se subrogó en la obligación pensional que le asistía en calidad de empleador, sin que la administradora de fondos de pensiones hubiere adelantado ninguna acción de cobro en su contra y a favor del demandante, allanándose de ese modo a la mora, si es que en gracia de discusión se admitiere la existencia de periodos sin cotización

Por su parte, el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES y COLPENSIONES E.I.C.E. no presentaron alegaciones finales.

### **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a estudiar en su integridad el fallo de instancia, bajo el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E.

#### **2.1. Problema Jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES causó el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, efecto para el que será necesario establecer si la presunta omisión en la afiliación y/o mora en el pago de los aportes en la que incurriera INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A., es oponible a su aspiración pensional, y si la sociedad empleadora se subrogó en la obligación pensional. En caso afirmativo, la Sala se ocupará de establecer la fecha en que se causó la pensión, el momento a partir del cual comienza su disfrute, el monto al que asciende, y si hay lugar al reconocimiento de los intereses de mora deprecados.

## 2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto tuvo en cuenta como semanas efectivamente cotizadas, el tiempo laborado por el actor al servicio de la INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A., por haberse probado la afiliación al Sistema General de Pensiones y el pago de los aportes; en cuanto declaró que el actor causó el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos previstos en la Decreto 758 de 1990, siendo la edad el último de los requisitos acreditados; en cuanto dispuso el disfrute de la prestación desde el día siguiente al de la última cotización; en cuanto ajustó el monto de la mesada en suma equivalente a un (1) SMMLV; declaró probada la excepción de compensación, y ordenó el reconocimiento de los intereses de mora; pero la modificará en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, y en el sentido de extender la condena en concreto hasta el 30 de noviembre de 2022, y finalmente la adicionará en el sentido de autorizar el descuento de los aportes para el sub-sistema de salud.

## 2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, debe señalarse que no existe discusión sobre los siguientes presupuestos fácticos: que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES nació el 29 de septiembre de 1952 (pág.13, doc.01, carp.01), se afilió en pensiones al INSTITUTO DE SGUROS

SOCIALES el 01 de enero de 1967 (págs.15-32, doc.01, carp.01), laboró al servicio de la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979 (pág.33, doc.01, carp.01; págs.255-256, doc.07, carp.01), solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 27 de noviembre de 2012, prestación que fue denegada mediante la Resolución GNR 021933 del 04 de marzo de 2013, tras considerarse que solo registraba 664 semanas cotizadas (págs.39-44, doc.01, carp.01), decisión que fue confirmada a través de la Resolución GNR 4956 del 09 de enero de 2014, en sede de reposición, esta vez, en razón a que solo tenía 756 semanas cotizadas (págs.45-52, doc.01, carp.01), y mediante la Resolución VPB 6755 del 30 de enero de 2015, en sede de apelación, aduciendo que solo contaba con 769 semanas cotizadas (págs.59-66, doc.01, carp.01).

Tampoco se controvierte que el 09 de julio de 2013 el litigioso por activa instauró una demanda ordinaria en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, proceso que fue conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-008-2013-00831-00 (págs.67-76, doc.01, carp.01), y en cuya sentencia de primera instancia, proferida el 04 de marzo de 2014 se acogieron las pretensiones de la demanda (págs.77-80, doc.01, carp.01), pero que fue revocada en segunda instancia, mediante sentencia dictada el 07 de abril de 2014 (págs.81-82, doc.01, carp.01).

Así mismo, no se debate que el 14 de octubre de 2014 el actor solicitó la corrección de su historia laboral, respecto del periodo laborado al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979 (págs.53-56, doc.01, carp.01), petición que fue negada el 28 de noviembre de 2014 porque no se allegaron los documentos o soportes que acreditaran el vínculo laboral con el empleador (págs.57-58, doc.01, carp.01); y que a través de la Resolución GNR 173683 del 12 de junio de 2015, obtuvo el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de \$9.353.566, liquidada sobre 790 semanas cotizadas (págs.83-82, doc.01, carp.01).

En igual sentido, no se refuta que el 19 de septiembre de 2017 el demandante instauró acción de tutela contra COLPENSIONES E.I.C.E., para que corrigiera su historia laboral, incluyendo el periodo laborado al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, y le reconociera la pensión de vejez (págs.93-100, doc.01, carp.01), amparo que fue concedido el 03 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de ordenarle a la entidad accionada, emitir respuesta de fondo a la solicitud de corrección de historia laboral y reconocimiento de la pensión de vejez (págs.101-116, doc.01, carp.01), decisión a la que se le dio cumplimiento mediante la Resolución SUB 243651 del 30 de octubre de 2017, en la que negó el reconocimiento de la

prestación arguyendo que el actor solo contaba con 871 semanas cotizadas (págs.119-124, doc.01, carp.01).

Finalmente, se encuentra probado que el 06 de febrero de 2018 el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES solicitó iniciar el proceso de cobro coactivo en contra de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. por los aportes para pensiones causados entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979 (págs.139-142, doc.01, carp.01), petición que resuelta en disfavor el 15 de junio de 2018, al considerarla improcedente por haber recibido el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez (págs.143-146, doc.01, carp.01), y el 22 de junio de 2018, porque no se encontraron registros de las cotizaciones (págs.147-148, doc.01, carp.01).

### **2.3.1. La Pensión de Vejez**

El Sistema General de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (preámbulo de la Ley 100 de 1993); de consiguiente, el Sistema General de Pensiones fue concebido para garantizarle a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica periódica denominada pensión, pagada por la entidad administradora de pensiones del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que le resulte aplicable a cada afiliado.

**2.3.1.1. De la afiliación y al Sistema General de Pensiones:** En orden a resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, ha de relieves la Sala que la Ley 90 de 1946 estableció el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, accidentes de trabajo, y muerte (artículo 1º), de forma que, debían asegurarse obligatoriamente todos los individuos que en virtud de un contrato de trabajo prestaran sus servicios a otra persona o empresa (artículo 2º), estando en cabeza del entonces INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES, la obligación de reconocer y pagar, entre otras, las pensiones de vejez (artículo 47).



Pese a ello, y ante la demora en la iniciación del funcionamiento del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el Decreto 2663 de 1950, mediante el cual se estatuyó el CST, estableció que el trabajador que hubiere laborado para una misma empresa, tendría derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación, o pensión de vejez, cuando arribara a los 55 años de edad, para el caso de los hombres, o a los 50 años, para el caso de las mujeres, después de veinte años de servicios continuos o discontinuos (artículo 260), prestación que solo dejaría de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo fuere asumido por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (artículos 193 y 259).

Pero fue solo con la expedición del Decreto 3041 de 1966, aprobatorio del Acuerdo 224 del mismo año, se estableció la obligatoriedad de afiliación al régimen de los seguros sociales contra los riesgos de invalidez y muerte de origen no profesional, y contra el riesgo de vejez, para los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, y para los trabajadores que prestaran sus servicios en empresas del sector oficial, siempre y cuando no estuvieren exceptuados por disposición legal expresa (artículo 1°); sin embargo, aquella obligación no surgió de forma inmediata, sino que se dio de manera paulatina en la medida en que el ISS fue extendiendo su cobertura en el territorio nacional y realizando el llamamiento a los empleadores para que efectuaran la inscripción de sus trabajadores, siendo que, para los sectores que estaban cubiertos por las Seccionales de los Seguros Sociales de Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Valle, y por las Oficinas Locales de los Seguros Sociales de Boyacá, Huila, Manizales y Santa Marta, la inscripción se hizo obligatoria a partir del 01 de enero de 1967 (artículo 1° de la Resolución 831 de 1966 del ISS).

Ahora bien, en el plenario se encuentra acreditado que el señor OCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES suscribió contrato de trabajo a término de fijo con la empresa INDUSTRIA ALIMENTICIA NOEL S.A. el 23 de septiembre de 1973 (págs.255-256, doc.07, carp.01), que laboró al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., sin solución de continuidad, hasta el 07 de marzo de 1979 (pág.33, doc.01, carp.01), y que durante dicho periodo estuvo afiliado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, según lo indicado en el Carné de Afiliación No.02-346.364 (pág.35, doc.01, carp.01), y en el informe de retiro del trabajador (pág.45, doc.07, carp.01), evidenciándose con ello que INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., realmente no incurrió en una omisión de afiliación.

**2.3.1.2. Del pago de los aportes al Sistema General de Pensiones:** De conformidad con lo reglamentado en el Decreto 3041 de 1966, vigente durante la época en la que el señor OCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES laboró al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., durante la vigencia de la relación de trabajo, el trabajador y el empleador deben efectuar

cotizaciones obligatorias (artículo 32), las cuales que se calculan con base en el salario devengado por el trabajador (artículo 33), siendo el empleador el responsable del pago de su aporte, y del aporte de los trabajadores a su cargo, efecto para el cual fue autorizado a descontar del salario de cada afiliado el monto de la cotización obligatoria (artículo 38), y correspondiéndole la administradora de pensiones cobrar las cotizaciones en mora.

De consiguiente, se colige que las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones antes descritas no puede oponerse a la aspiración pensional del afiliado, pues en la relación tripartita que existe entre laborante, su empleador y la administradora de pensiones, su única obligación es prestar el servicio contratado. Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que “... para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro” (CSJ SL del 10-02-2009; SL13276-2015; SL12718-2016; SL3550-2018; SL2074-2020; SL3691-2021; SL1720-2022).

Pese a lo anterior, cumple memorar que las colillas de pago de nómina del señor OCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES, emitidas tanto por INDUSTRIA ALIMENTICIA NOEL S.A. (págs.47-60, doc.07, carp.01), como por INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. (págs.47-254, doc.07, carp.01), dan cuenta de los descuentos efectuados al trabajador por concepto de aportes para pensiones, y que en el Reporte de Semanas Cotizadas 1967-1994, obra registro del pago de las cotizaciones, desde el 23 de septiembre de 1973 y hasta el 07 de marzo de 1979 (págs.02-03, doc.28, carp.01), y aunque dichas cotizaciones reportan la novedad de “relación de los nombres de novedades no correlacionadas”, lo cierto es que, además de llevar el nombre del demandante, aquellas registran el mismo número de afiliación con el que fue registrado el actor (ver el carné de afiliación -pág.35, doc.01, carp.01- y el reporte de semanas cotizadas -pag.03, doc.28, carp.01-), evidenciándose con ello que INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S. tampoco incurrió en la omisión de pagar los aportes para pensiones, y por ello, el periodo de tiempo laborado por el actor al servicio de la empresa codemandada, entre el 23 de septiembre de 1973 y el 07 de marzo de 1979, que corresponde a 284,57 semanas (1992 días), será contabilizado como semanas efectivamente cotizadas.

Adicionalmente advierte la Sala que los actos administrativos e historias laborales que obran en el expediente, dan cuenta de una cantidad de semanas cotizadas diferente, esto es, la Resolución GNR 021933 del 04 de marzo de 2013, refiere 664 semanas (págs.39-44, doc.01,

carp.01), en la Historia Laboral actualizada al 07 de diciembre de 2013 registra 728,29 semanas(doc.13, carp.01), la Resolución GNR 4956 del 09 de enero de 2014, describe 756 semanas (págs.45-52, doc.01, carp.01), la Historia Laboral actualizada al 29 de octubre de 2014 reporta 769,14 semanas(doc.13, carp.01), la Resolución VPB 6755 del 30 de enero de 2015, se mencionan 769 semanas (págs.59-66, doc.01, carp.01), la Resolución GNR 173683 del 12 de junio de 2015, alude 790 semanas (págs.83-82, doc.01, carp.01), la Resolución SUB 243651 del 30 de octubre de 2017, refiere 871 semanas (págs.119-124, doc.01, carp.01), la Historia Laboral del 08 de febrero de 2018 reporta 871,14 semanas (doc.13, carp.01), y la Historia Laboral actualizada al 15 de abril de 2020 reporta 855 semanas (págs.15-32, doc.01, carp.01), y aunque la entidad accionada fue requerida para que indicara las razones por las que se presentaban dichas inconsistencias (doc.26, carp.01), lo que hizo fue allegar una Historia Laboral actualizada al 12 de octubre de 2021, la cual registra 665,43 semanas, sin brindar ninguna explicación al respecto (doc.28, carp.01).

Sobre este asunto en particular, la Corte Constitucional de vieja data ha sostenido que *“La historia laboral es un documento expedido por las administradoras de pensiones en el cual se reportan las cotizaciones realizadas por los afiliados al Sistema de Seguridad Social en su trayecto laboral. Contiene información detallada sobre el empleador (o el registro del aporte como trabajador independiente), el periodo laborado, el salario, el monto cotizado, la fecha de pago de cotización y el número de semanas aportadas, entre otros”* [T-463 de 2016, T-058 de 2017].

Las administradoras de pensiones *“... tienen la obligación de custodiar la información consignada, velar por su certeza y exactitud, de tal manera que sea precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna, en consecuencia, las imprecisiones presentadas son su responsabilidad. En virtud de ello, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, facultó a las administradoras de fondos de pensiones para “a. verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes (...); b. adelantar las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados; c. citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes”* [T-463 de 2016, T-058 de 2017].

De cualquier forma, la negligencia en la cual se incurra en la construcción, guarda y vigilancia de las historias laborales y los inconvenientes que puedan presentar los documentos y sus contenidos, es responsabilidad de las administradoras de pensiones. Una interpretación diferente dejaría desprovisto de contenido el deber de las aseguradoras y los derechos de los titulares de la información. Frente al particular, en la Sentencia T-855 de 2012, reiterada en las

Sentencias T-463 de 2016 y T- 058 de 2017 se señaló que: *"Al ser las entidades administradoras de pensiones las llamadas a la conservación, guarda y custodia de los documentos contentivos de la información correspondiente a la vinculación del afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, no les es dable trasladarle al interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de la pérdida, deterioro, desorganización o no sistematización de dicha información"*. (Subraya de la Sala).

Y como COLPENSIONES E.I.C.E. acreditó que la merma en las cotizaciones reportadas por el demandante sea el producto de la investigación adelantada para verificar su exactitud, o de los informes rendidos por sus empleadores, lo procedente es tener en cuenta el reporte de semanas cotizadas actualizado al 08 de febrero de 2018 (doc.13, carp.01), en el cual figuran 871,14 semanas (6.098 días), que sumadas a las 284,57 semanas (1.992 días), laboradas por el actor al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., y que fueron debidamente cotizadas, según se explicó en las líneas que anteceden, sumatoria que permite establecer que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES cuenta con 1.155,71 semanas (8.090 días), válidas para pensiones, según y conforme la liquidación que se aneja a la presente decisión.

**2.3.1.3. De la causación de la pensión de vejez:** Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida que pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, deben acreditar, desde el año 2014, una edad mínima de 57 años, las mujeres, o de 62 años, los hombres, y desde el año 2015, una densidad de semanas igual o superior a las 1.300 (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003), siendo conveniente relieves que los afiliados que para el 01 de abril de 1994, contasen con 15 años de servicios, que corresponden a 771,42 semanas cotizadas (CSJ SL1123-2021, SL3787-2021), o 35 años de edad en el caso de las mujeres, o 40 años de edad en el caso de los hombres, podían pensionarse con el número de semanas de cotización y el monto o tasa de reemplazo descritos en el régimen anterior (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), régimen transicional que solo se extendió hasta el 31 de julio de 2010, salvo para los beneficiarios que, para el 29 de julio de 2005, hubieren cotizado 750 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes el régimen de transición se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 (parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 001 de 2005).

Con el fin de zanjar este aspecto de la controversia, cumple indicar que, para el 01 de abril de 1994, el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES contaba con 41 años de edad, puesto que nació el 29 de septiembre de 1952 (pág.13, doc.01, carp.01), y aunque para el 31 de julio de 2010 solo contaba con 57 años de edad, se evidencia que para el 25 de julio de 2005 había cotizado 902,14 semanas cotizadas (6.315 días), siendo con ello beneficiario de la transición

pensional, prerrogativa que le permite pensionarse bajo el régimen anterior aplicable, que en su caso, no es otro que el establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dado que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones se encontraba vinculada al sector privado de la economía, compendio normativo que para el reconocimiento de la pensión de vejez exige 55 años de edad, a las mujeres, 60 años de edad, a los hombres, y 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1.000 semanas en cualquier tiempo (artículo 12 del Decreto 758 de 1990), requisitos que actor cumplió el 29 de septiembre de 2012, cuando arribó a los 60 años de edad, habiendo cotizado 1.147 semanas (8.029 días), de las cuales, 862,57 (6.308 días), se cotizaron en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

**2.3.1.4. Del disfrute de la pensión de vejez:** Ahora bien, para disfrutar de la prestación pensional por vejez, además de la acreditación de los requisitos de edad y densidad de semanas antes descritos, es necesario que el afiliado se retire del Sistema General de Pensiones (artículos 13 y 36 del Decreto 758 de 1990); sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha admitido algunas excepciones a la obligación de desafiliación formal del sistema para entrar a disfrutar de la pensión de vejez, *verbi gratia*, cuando de la conducta del afiliado se colige su intención de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema (CSJ SL del 20-10-2009, Radicado 35605, SL-4611 del 11-03-2015, Radicado 56171, SL-5603 del 06-04-2016, Radicado 47236, SL-11895 del 12-07-2017, Radicado 47129, SL-415 del 21-02-2018, Radicado 64761, SL-4360 del 09-10-2019, Radicado 68852, SL-2555 del 01-07-2020, Radicado 79733, SL-1302 del 03-03-2021, Radicado 72795).

Pues bien, en el plenario se encuentra acreditado que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES causó el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez el 29 de septiembre de 2012, reclamó el reconocimiento de la prestación el 27 de noviembre del mismo año (págs.39-44, doc.01, carp.01), y cesó el pago de los aportes para pensiones el día 30 del mismo mes y año; de consiguiente (doc.28, carp.01), teniendo en cuenta que el actor tuvo la intención de retirarse del sistema desde la fecha en la que hizo la última cotización, y por ello, el derecho al disfrute de la prestación se hizo efectivo a partir del 01 de diciembre de 2012, tal y como lo indicó la cognoscente de primera instancia.

**2.3.1.5. De la liquidación de la pensión de vejez:** Para los beneficiarios del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estuvieran a más de 10 años de consolidar el derecho a la pensión, el IBL se establece con el promedio de los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio de toda la vida laboral, siempre que el afiliado

hubiere cotizado más de 1.250 semanas, y que dicho promedio resulte superior al de los últimos 10 años (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y para quienes les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, con el promedio de lo devengado por el afiliado durante el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior (inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), grupo poblacional respecto del cual no se contempló la posibilidad de liquidar el IBL con los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal y como lo ha definido de manera uniforme y pacífica nuestro órgano jurisdiccional de cierre (CSJ SL del 15-02-2011, radicado 44238; SL del 17-04-2012, radicado 53037, SL-570 del 06-08-2013, radicado 56460; SL-17476 del 10-12-2014, radicado 45074; SL-2982 del 25-02-2015, radicado 52404; SL-6398 del 27-04-2016, radicado 46343; SL-12709 del 18-07-2017, radicado 54031; SL-4975 del 14-11-2018, radicado 43278, SL-2587 del 08-07-2020, radicado 73921).

De cara a lo anterior, es preciso memorar que el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES nació el 29 de septiembre de 1952 (pág.13, doc.01, carp.01), y que para el 01 de abril de 1994 contaba con 41 años de edad, esto es, le faltaban más de dieciocho (18) años para causar el derecho a la pensión de vejez, de lo que se desglosa que, el IBL debe establecerse con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, sin que le asista el derecho a que el mismo sea calculado con el promedio devengado en toda la vida laboral, considerando que solo cotizó 1.155,71 semanas. Realizadas las operaciones aritméticas correspondientes la Sala encontró que el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años (514,29 semanas – 3.600 días) asciende a \$533.096.

En lo que respecta al monto o tasa de reemplazo, se memora que en los términos del Decreto 758 de 1990, la pensión de vejez se liquida con base en un monto inicial del 45% y aumentos equivalentes al 3% por cada 50 semanas cotizadas que superen las primeras 500 hasta llegar al 90% por 1.250 semanas cotizadas (artículo 20), y como el actor cotizó 1.155,71 semanas, la tasa de reemplazo corresponde al 84%, que aplicada sobre un IBL de \$533.096, arroja una mesada inicial de \$447.801 para el año 2012, cifra que resulta inferior al SMLMV, fijado por el Gobierno Nacional en la suma de \$566.700, mediante el Decreto 4919 de 2012, debiéndose reconocer la prestación en suma equivalente a un (1) SMMLV, según lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, tal y como se dispuso en la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, la Sala encuentra que sobre las mesadas que se han venido causando, operó parcialmente el fenómeno de la prescripción, en vista de que, entre el 01 de diciembre de 2012, cuando se hizo efectivo el derecho al disfrute de la prestación, el 30 de enero de 2015, cuando se desató el recurso de apelación impetrado en contra del acto administrativo que

negó el reconocimiento de la prestación (págs.59-66, doc.01, carp.01), y el 15 de julio de 2020, cuando se radicó la presente acción (doc.01, carp.01), transcurrió con creces el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, sin que la emisión de la Resolución 243651 del 30 de octubre de 2017 (págs.117-124, doc.01, carp.01) hubiere tenido la vocación de interrumpir nuevamente dicho término, siendo que la misma se expidió con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 03 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín (págs.101-116, doc.01, carp.01), en el que se amparó el derecho de petición, y se dispuso dar respuesta de fondo a la solicitud de corrección de historia laboral incoada por el demandante, esto es, no tuvo como origen el reclamo determinado de la prestación pensional, tal y como lo exige el artículo 489 del CST, a efectos de interrumpir el fenómeno de la prescripción.

Así las cosas, COLPENSIONES E.I.C.E. únicamente deberá reconocer en favor del demandante, las mesadas pensionales causadas a partir del 15 de julio de 2017, esto es, en los tres años anteriores a la fecha en la que se radicó la presente acción, el que liquidado hasta 30 de noviembre de 2022, asciende a la suma de \$21.435.936, incluidas solamente las mesadas adicionales de diciembre de cada anualidad, por cuanto la prestación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, (parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005). A partir del 01 de diciembre de 2022, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá seguir reconociendo en favor del demandante, la suma de \$1.000.000 por concepto de mesada pensional, valor sobre el que operan los reajustes y descuentos de Ley.

Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la Resolución GNR 173683 del 12 de junio de 2015, se dispuso el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de \$9.353.566 (págs.83-82, doc.01, carp.01), lo procedente será compensar dicho pago, sobre la suma adeudada por concepto de retroactivo pensional, de forma indexada, tal y como lo ordenó la cognoscente de primera instancia.

Finalmente, se denota que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se adicionará en este aspecto la sentencia consultada.

### **2.3.2. Los intereses de mora**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al

pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que: (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Sin embargo, la jurisprudencia también ha reiterado que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad para negar el reconocimiento de la prestación, y en esa dirección destacó que no resultaba razonable imponer el pago de intereses moratorios cuando la conducta de la administradora estuvo guiada por el respeto a una normativa que de manera razonable fijaba ciertas reglas para zanjar la controversia (CSJ SL787-2013; SL8644-2014; SL2941-2016; SL1547-2018; SL4599-2019; SL2414-2020), y aunque la jurisprudencia también ha adoctrinado que los intereses moratorios no son viables cuando el reconocimiento de la prestación obedece a la creación de un criterio jurisprudencial (CSJ SL787-2013; SL8644-2014; SL2941-2016; SL1547-2018; SL4599-2019; SL2414-2020), ha sido iterativa en indicar que los intereses moratorios son deben reconocerse cuando se evidencia el incumplimiento de las obligaciones que le asisten a las entidades administradoras (CSJ SL3550-2018; SL-2074-2020; SL4295-2021), tal y como quedó evidenciado en el asunto de la referencia.

Respecto a la fecha desde la que se hacen exigibles, el órgano jurisdiccional de cierre ha enfatizado de forma iterativa, que los citados intereses comienzan a causarse desde la fecha en la que empieza el retardo del pago del beneficio pensional, por lo que se debe precisar que solo es dable hablar de retardo cuando se ha incumplido con el término establecido en la Ley para el reconocimiento de la prestación, vale decir, cuatro meses en tratándose de pensiones de vejez (CSJ SL del 15-05-2008, Radicado 33233; SL del 17-04-2012, Radicado 42488, SL-1023 del 17-03-2021, Radicado 81812); allende del tiempo con que contaba COLPENSIONES E.I.C.E. para resolver la solicitud de reconocimiento pensional radicada por la demandante, en tanto en cuanto, de conformidad con lo indicado en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1933, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003: *“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”*, y que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia pacíficamente ha reiterado *“... que los intereses moratorios proceden a partir del día siguiente*



al vencimiento de los 4 meses que confiere la ley 100 de 1993 para resolver la solicitud" (CSJ SL-4985 del 05-04-2017, radicado 49082; SL-3130 del 19-08-2020, radicado 66868; SL-3552 del 28-07-2021, radicado 59174).

Así las cosas, COLPENSIONES E.I.C.E., deberá reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora causados desde el 28 de marzo de 2013, esto es, desde el día siguiente al vencimiento de los cuatro (4) meses con lo que contaba para resolver de fondo la solicitud pensional radicada por el señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES el 27 de noviembre de 2012 (págs.39-44, doc.01, carp.01), razón por la cual se confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto tuvo en cuenta como semanas efectivamente cotizadas, el tiempo laborado por el actor al servicio de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A., por haberse probado la afiliación al régimen pensional y el pago de los aportes; en cuanto declaró que el actor causó el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos previstos en la Decreto 758 de 1990, siendo la edad el último de los requisitos acreditados; dispensó el disfrute de la prestación desde el día siguiente al de la última cotización; ajustó el monto de la mesada en suma equivalente a un (1) SMMLV; declaró probada la excepción de compensación, y ordenó el reconocimiento de los intereses de mora; pero la modificará en el sentido de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, y en el sentido de extender la condena en concreto hasta el 30 de noviembre de 2022, y la adicionará en el sentido de autorizar el descuento de los aportes para el sistema general en salud.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, no se impondrán costas en esta instancia considerando que la sentencia de primera instancia se analizó integralmente en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., en virtud del grado jurisdiccional de consulta surtido. Las costas impuestas en la primera instancia se confirman, por haber sido COLPENSIONES E.I.C.E. vencida en el proceso, atendiendo a lo previsto en el numeral 1º del artículo 365 de CGP.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** MODIFICAR y ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 21 de junio de 2022 de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., el cual quedará del siguiente tenor literal:

*“**SEGUNDO:** DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, y CONDENAR a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocer y pagar a favor del señor OSCAR DE JESÚS RESTREPO YEPES, la suma de \$21.435.936, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 15 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de 2022, incluida la mesada adicional de diciembre de cada anualidad, cifra sobre la que se autoriza descontar el valor correspondiente para sufragar los aportes al Sistema General de Salud. A partir del 01 de diciembre de 2022, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá seguir reconociendo en favor del demandante, la suma de \$1.000.000 por concepto de mesada pensional, valor sobre el que operan los reajustes y descuentos de Ley”.*

**SEGUNDO:** CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

**TERCERO:** SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertido en el auto AL-2550 del 23-06-2021, radicado 89.628, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario